

N/REF: 0074/2025**I**

La consulta plantea distintas dudas en relación con la realización de un estudio que se pretende llevar a cabo desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (en adelante CCAES) cuya finalidad es realizar una encuesta a la población dirigida a las personas que el 29 de octubre de 2024 eran residentes en la CCAA de Valencia en las zonas afectadas por la DANA, con el objetivo de conocer el impacto que este fenómeno hubiera podido tener en la salud mental y el bienestar de la población afectada. A estos efectos se explica en el Informe justificativo adjunto que el tratamiento de datos personales puede entenderse dividido en dos fases, una primera en la que se seleccionaría de manera aleatoria a las personas a las que se invitaría a participar en esta encuesta conforme a los criterios de selección proporcionados por el responsable del tratamiento (los cuales no se identifican en la documentación recibida). Esta primera fase se subdividiría, a su vez, en otras, en donde primero se remitiría una carta con un documento explicativo de estudio, invitando a participar e informando de que en los días siguientes la empresa adjudicataria se pondría en contacto con ellos para concertar una cita telefónica o presencial si la persona manifestara interés en participar, momento en el que se le recabaría su consentimiento informado para realizar dicha segunda fase consistente en la encuesta propiamente dicha. Debiendo señalarse, por último, que esta entrevista se repetiría durante los dos años siguientes.

En el informe justificativo que se adjunta se indica la necesidad de tratar los datos de nombre, apellido, domicilio y teléfono para garantizar que la carta llega a su destinatario y que se perciba como oficial y legítima, adicionando que lo contrario sería perjudicial para la validez y eficacia del estudio.

A efectos de facilitar la lectura y comprensión de este informe pasamos a enumerar, en síntesis, las distintas cuestiones que conforman esta consulta y a las que se dará cumplida respuesta en el mismo:

1. Suficiencia o no de las competencias del CCAES y de la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana para realizar el estudio descrito.
2. Naturaleza de los datos personales cuya comunicación se desea solicitar a la Generalitat de Valencia.
3. Condiciones de licitud para poder llevar a cabo los tratamientos de datos que se desean realizar de conformidad con el artículo 6.1 y 9 RGPD.

4. Posibilidad de que una futura norma con rango de ley estableciera las medidas y garantías adecuadas, tal y como se hace en la Ley de Bases de Régimen Local, a efectos del Padrón, y en la Ley de Telecomunicaciones, a efectos del número de teléfono, que permitiera la cesión de datos para su uso exclusivo para encuestas realizadas por las AAPP para fundamentar la toma de decisiones en materia de salud.
5. Posibilidad de recabar datos del Padrón ex artículo 16.3 LBRL.
6. Determinación de quién sería la entidad y organismo público competente para la cesión de los números de teléfono, con especial mención a las personas que han ejercido su derecho a no figurar en las guías accesibles al público.

II

Comenzando por la primera de las cuestiones planteadas, se interpela en ella a este Servicio Jurídico acerca de la existencia o no de competencia para la realización del estudio descrito por el Centro de Coordinación de alertas y emergencias sanitarias y por la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana sobre la base del artículo 12 de la Ley 33/2011, General de Salud Pública, que atribuye a las autoridades sanitarias las funciones de vigilancia y evaluación de la salud de la población, y de los artículos 17.2.b) y 23.3 de la Ley 10/2014, de Salud de la Comunidad Valenciana, que encomiendan a la Conselleria de Sanidad la gestión de la información de la salud pública y el uso del Sistema de Información Poblacional para el desarrollo de actuaciones en este ámbito.

Respondiendo a esta consulta hemos de señalar que en España pueden realizar estadísticas de carácter voluntario tanto entes u organismos públicos como entidades privadas, siempre que no se trate de estadística para fines estatales por estar reservada la competencia exclusiva al Estado ex artículo 149.1.31 CE, regulada en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de Función Pública Estadística, cuyo artículo 23 inicia la regulación del Título II, de los Servicios Estadísticos del Estado, disponiendo que: *La función estadística pública se desarrollará en el ámbito de la Administración del Estado por el Instituto Nacional de Estadística, el Consejo Superior de Estadística y las unidades de los diferentes Departamentos ministeriales y de cualesquiera otras entidades públicas dependientes de la misma a las que se haya encomendado aquella función.*

Añadiendo el artículo 32 LFPE sobre otros servicios estadísticos de la Administración del Estado que: *“1. Los Departamentos ministeriales y cualesquiera otras entidades dependientes de la Administración del Estado participarán, a través de sus servicios estadísticos, en la elaboración de estadísticas para fines estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias.*

2. Los Departamentos ministeriales podrán proponer la inclusión de estadísticas en el Plan Estadístico Nacional”.

En consecuencia, son estadísticas para fines estatales y se rigen por la LFPE las incluidas en el Plan Estadístico Nacional, aprobado por Real Decreto del Consejo de Ministros cada cuatro años, las aprobadas mediante Real Decreto individual por razones de urgencia, o las incluidas de manera automática por la normativa Europa. Fuera de estos casos, cuando se trate de encuestas voluntarias no configuradas como “estadísticas para fines estatales”, se trataría de encuestas administrativas o de gestión, siendo tal el caso de la encuesta objeto de esta consulta que desea realizar el CCAES a fin de recabar información para fines de salud pública, planificación o evaluación de políticas de salud pública. A este tipo de encuestas les será aplicable la normativa de protección de datos personales, lo que exigirá con carácter previo la existencia de una base jurídica adecuada para poder realizarla, así como la normativa sanitaria y de salud pública.

Las competencias en vigilancia de la salud pública y en preparación y respuesta ante amenazas de la salud pública del Ministerio de Sanidad las establece el artículo 14 de la Ley 33/2011, destacando entre sus letras a los efectos que ahora nos ocupan la i): *La difusión de la información derivada de la vigilancia en salud pública, sobre el estado de salud, equidad en salud y bienestar de la población, así como la influencia ejercida por los determinantes sociales de la salud.*

Añadiendo el artículo 12 en materia de vigilancia en salud pública que: *La vigilancia en salud pública es el conjunto de actividades destinadas a recoger, analizar, interpretar y difundir información relacionada con el estado de la salud de la población y los factores que la condicionan, con el objeto de fundamentar las actuaciones de salud pública,* y el artículo 13.1 que: *Corresponde a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, a las ciudades de Ceuta y Melilla y a la Administración local, en el ámbito de sus competencias, la organización y gestión de la vigilancia en salud pública.*

En cuanto se refiere al CCAES hemos de indicar que fue creado en el año 2004 como un Centro dependiente de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Tiene como función principal coordinar la gestión de la información y apoyar en la respuesta ante situaciones de alerta o emergencia sanitaria nacional o internacional que supongan una amenaza para la salud de la población. En concreto, el artículo 1 de la Orden SCO/564/2004, de 27 de febrero, por la que se establece el Sistema de Coordinación de alertas y emergencias de Sanidad y Consumo le atribuye los siguientes planteamientos estratégicos:

a) Proporcionar el apoyo logístico y coordinar los medios operativos necesarios para la toma de decisiones de la autoridad sanitaria en las situaciones de alerta y emergencia que puedan afectar a la salud de la población.

b) Integrar en una única red departamental la detección de riesgos, la planificación y preparación de respuestas y el desarrollo de las intervenciones que correspondan al Ministerio de Sanidad y Consumo.

c) Coordinar las informaciones y las comunicaciones de los distintos órganos directivos del Departamento y de los Organismos autónomos adscritos a él y, en su

caso, integrar las de otras entidades del Sistema Nacional de Salud, en relación con las alertas, emergencias y situaciones de crisis.

d) Servir de apoyo al plan de respuesta de salud pública para alertas por riesgos extraordinarios biológicos, químicos, alimentarios, radiológicos y nucleares del Sistema Nacional de Salud, así como a las Administraciones y organismos nacionales, autonómicos, comunitarios o internacionales competentes en la gestión de situaciones de crisis y catástrofes.

Añadiendo su artículo 6 en materia de convenios de colaboración que: *El Ministerio de Sanidad y Consumo promoverá la colaboración con otras instituciones especializadas del Sistema Nacional de Salud u otros organismos competentes relacionados con las funciones encomendadas al SICAS.*

A la vista de los preceptos que se acaban de analizar resulta que aunque el CCAES puede elaborar y coordinar estadísticas sanitarias, no se trata de su función principal, ni se tratará en todo caso de estadísticas oficiales consolidadas dentro del Plan Estadístico Nacional, sino de estadísticas a nivel administrativo y sanitario.

Siendo relevante a estos efectos la regulación contenida en el Real Decreto 72/2025, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Programa Anual 2025 del Plan Estadístico Nacional 2025-2028, cuya sección segunda relaciona todas las estadísticas incluidas en el Programa anual 2025 clasificadas por organismo responsable, figurando entre las estadísticas previstas dentro del Ministerio de Sanidad para la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, dentro de la cual se ubica el CCAES, las tres siguientes: Estadística para interrupciones voluntarias del embarazo, Calidad de las aguas de consumo humano y Calidad de las Aguas de Baño. Esta previsión viene a corroborar que la estadística objeto de esta consulta no forma parte de las estadísticas oficiales realizadas por los servicios estadísticos oficiales para fines estatales.

Por su parte, la Ley 10/2014, de salud de la Comunidad de Valencia establece el marco dentro del cual se insertan servicios como el de Análisis de la Información Sanitaria, estableciendo su artículo 23.3 que: *3. Corresponde a la conselleria competente en materia de sanidad la responsabilidad de desarrollar y gestionar la vigilancia y la información en salud pública a través de la Red Valenciana de Vigilancia en Salud Pública, el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida y el Sistema de Información en Salud Pública de la Comunitat Valenciana.*

A la vista de todo lo expuesto, resulta razonable que la Conselleria de Salud de la Comunidad Valenciana pueda elaborar estadísticas de carácter voluntario dentro del marco de las competencias que tiene atribuidas sobre servicios de información sanitaria, así como que también pueda realizarlas el Ministerio de Sanidad en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas en materia de vigilancia de la salud pública. Ello no obstante, dado que la Orden 564/2004, de 27 de febrero, no establece que la elaboración de estadísticas sea una de las funciones principales del CCAES, se recomienda incorporar en el informe justificativo realizado sobre el estudio que se pretender llevar a cabo, una mayor concreción de la competencia del CCAES para la

realización de las encuestas a través del ejercicio de su propia competencia, y también en el correspondiente convenio de colaboración, que de conformidad con lo previsto en el ut supra artículo 6 de la citada Orden y tal y como se contempla en dicho informe justificativo se tiene previsto realizar.

III

En siguiente lugar se consulta acerca de la existencia o no de habilitación legal para que la Conselleria de Sanidad de la Comunidad de Valencia comunique los datos identificativos al CCAES para llevar a cabo una primera toma de contacto con los potenciales destinatarios de las encuestas a fin de remitirles cartas personalizadas a sus domicilios y de realizar un posterior contacto telefónico con las personas identificadas, con carácter previo a recabar el consentimiento informado expreso para el tratamiento de datos a través de las correspondientes encuestas propiamente dichas.

Como hemos anticipado en la primera consideración jurídica de este informe para responder esta consulta resulta primordial clarificar con carácter previo qué naturaleza tienen los datos que se desea solicitar, es decir, su calificación o no como datos especialmente protegidos.

Comenzando por la primera cuestión, es pacífico que los datos de contacto iniciales para elaborar los listados de personas a invitar se prevé que sean solicitados al Sistema de Información Poblacional de la Conselleria de Salud de la Generalitat de Valencia, regulado en el artículo 17 de la Ley 10/2024, de Salud de la Comunitat Valenciana en los siguientes términos: *El Sistema de Información Poblacional (SIP) es el registro administrativo corporativo de la conselleria competente en materia de sanidad que contiene información administrativa y sanitaria de las personas residentes en la Comunitat Valenciana y de aquellas que, no siendo residentes, acceden a las prestaciones sanitarias del Sistema Valenciano de Salud.*

El concepto de “datos relativos a la salud” es una categoría autónoma del derecho de la UE que debe interpretarse de manera uniforme en todo su territorio, a estos efectos traemos a colación un extracto de nuestro informe número 49/2024:

“En consecuencia, de la aplicación de la norma proyectada se va a someter a tratamiento (artículo 4.2 RGPD), con carácter general, información susceptible de ser calificada como dato de carácter personal (artículo 4.1 RGPD), y en particular, categorías especiales de datos (artículo 9 RGPD), entre los que se encuentran datos relativos a la salud (artículo 4.15 RGPD).

En efecto, el citado precepto define «datos relativos a la salud» como datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud.

El concepto de “dato relativo a la salud” del art. 4.15) RGPD es un concepto autónomo de derecho europeo que ha de ser objeto de interpretación uniforme en toda la UE.

Tal y como expresa el TJUE (véanse apartados 81 y ss. de la STJUE de 22 de junio de 2021, C-439/19),

81 A este respecto, procede recordar que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance debe normalmente ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión (sentencias de 19 de septiembre de 2000, Linster, C 287/98, EU:C:2000:468, apartado 43, y de 1 de octubre de 2019, Planet49, C 673/17, EU:C:2019:801, apartado 47).

El RGPD no contiene ninguna remisión al derecho nacional acerca del concepto de “datos relativos a la salud”, por lo que el alcance de este habrá de ser objeto de interpretación uniforme en el seno de la UE. Por ello, la interpretación acerca del concepto y el alcance de “datos relativos a la salud” no puede ser diferente en un Estado miembro que en otro.

De manera algo más extensa, el Considerando (35) establece:

Entre los datos personales relativos a la salud se deben incluir todos los datos relativos al estado de salud del interesado que dan información sobre su estado de salud física o mental pasado, presente o futuro. Se incluye la información sobre la persona física recogida con ocasión de su inscripción a efectos de asistencia sanitaria, o con ocasión de la prestación de tal asistencia, de conformidad con la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo; todo número, símbolo o dato asignado a una persona física que la identifique de manera unívoca a efectos sanitarios; la información obtenida de pruebas o exámenes de una parte del cuerpo o de una sustancia corporal, incluida la procedente de datos genéticos y muestras biológicas, y cualquier información relativa, a título de ejemplo, a una enfermedad, una discapacidad, el riesgo de padecer enfermedades, el historial médico, el tratamiento clínico o el estado fisiológico o biomédico del interesado, independientemente de su fuente, por ejemplo un médico u otro profesional sanitario, un hospital, un dispositivo médico, o una prueba diagnóstica in vitro.

Acoge pues, el RGPD, un concepto amplio de “dato relativo a la salud”, incluyendo el “riesgo” de padecer enfermedades (futuras), y, por lo tanto, aunque no exista tal enfermedad hoy, o ni siquiera llegue a materializarse efectivamente ese “riesgo” (sujeto, como tal riesgo de salud, a una probabilidad) en el futuro.

Sobre la necesidad de interpretar dicho concepto de una manera amplia, véase STJUE de 1 de agosto de 2022, C-184/20, apartados 124 a 128). Así:

125 Además, una interpretación amplia de los conceptos de «categorías especiales de datos personales» y de «datos sensibles» se ve respaldada por el objetivo de la Directiva 95/46 y del RGPD, a que se ha hecho mención en el apartado 61 de la presente sentencia, de asegurar un alto nivel de protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, en particular, de su intimidad, en relación con el tratamiento de los datos personales que las afectan (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de noviembre de 2003, *Lindqvist*, C 101/01, EU:C:2003:596, apartado 50).

126 Más aún, la interpretación contraria se opondría a la finalidad del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 95/46 y del artículo 9, apartado 1, del RGPD, que consiste en garantizar una mayor protección frente a tales tratamientos, que, en atención a la particular sensibilidad de los datos objeto de ellos, pueden constituir, como se desprende del considerando 33 de la Directiva 95/46 y del considerando 51 del RGPD, una injerencia especialmente grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales, garantizados por los artículos 7 y 8 de la Carta [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de septiembre de 2019, *GC y otros (Retirada de enlaces a datos sensibles)*, C 136/17, EU:C:2019:773, apartado 44].

Por consiguiente, resultarán de aplicación a las previsiones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)”.

Por lo expuesto, la mera inclusión del nombre, apellidos y domicilio en una base de datos de una Administración sanitaria determina su consideración como datos de salud al tratarse de *información sobre la persona física recogida con ocasión de su inscripción a efectos de asistencia sanitaria*, con la consiguiente activación del nivel de protección especial que tienen los datos sensibles.

Partiendo de la consideración como datos de salud que ostentan justamente los datos que se desea solicitar al SIP (nombre, apellidos, domicilio y teléfono), la licitud de su tratamiento requeriría, con carácter previo y en todo caso, el levantamiento de la prohibición general prevista en el artículo 9.1 RGPD.

IV

Entrando al análisis de las condiciones de licitud para poder llevar a cabo los tratamientos de datos que se desean realizar de conformidad con el artículo 6.1 y 9 RGPD para realizar el estudio indicado, resulta necesario examinar con carácter

preliminar si los actos preparatorios previos a la realización de la encuesta propiamente dicha constituyen o no parte integrante de la estadística, con la consiguiente participación en el beneficio del régimen de compatibilidad de fines estadísticos previsto en el artículo 5 y 89 RGPD; y todo ello, al margen y sin perjuicio de la circunstancia analizada en el considerando anterior de no hallarnos ante una estadística oficial de las elaboradas con carácter obligatorio por los servicios estadísticos oficiales.

En relación con esta cuestión, nuestro informe número 49/2020 relativo a la consulta planteada por el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la posible cesión de los listados de números de teléfono por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) establece que:

“A estos efectos, debe partirse de que los datos solicitados no lo son al objeto de su tratamiento estadístico, sino como medio de contacto con las personas que van a participar en la encuesta, siendo los datos que ellas faciliten los que serán objeto de las correspondientes operaciones estadísticas”.

Asimismo, el diccionario de la Real Academia Española define estadística como “función de valores obtenidos de una muestra, que se utiliza para inferir propiedades de una población”, y también como “estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de las sociedades humanas”, por lo que una finalidad estadística consistirá en la recogida, tratamiento y análisis de datos para producir agregados numéricos, o resultados estadísticos anonimizados, como medias, porcentajes o distribuciones, sin identificar a personas concretas. Siendo esto así, la recogida de datos de contacto, tales como nombre y apellidos, domicilio o teléfono, no formaría parte de una finalidad estadística en el sentido técnico de la LFPE. Los datos de contacto son personales e identificativos y serían utilizados en este caso en concreto para fines administrativos (contactar con los potenciales destinatarios de la encuesta), pero no para los fines estadísticos propiamente dichos.

Sentado pues que la recogida de datos de contacto no resulta beneficiaria del régimen de compatibilidad de fines dimanante del artículo 89.1 RGPD al que remite el artículo 5.1.b) RGPD resulta que dicho artículo 89.1 dispone que: *El tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos estará sujeto a las garantías adecuadas, con arreglo al presente Reglamento, para los derechos y las libertades de los interesados*, resulta oportuno clarificar que la hipótesis contraria, pese a no concurrir, tampoco conduciría al resultado de permitir el tratamiento de estos datos sin contar previamente con el consentimiento del interesado.

En efecto, el carácter especialmente protegido que tiene los datos que se desean solicitar determina que resulte aplicable el artículo 9.2 del RGPD, cuya letra j) en relación con la posibilidad de levantar la prohibición de tratar datos sensibles establece que: *el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el*

artículo 89, apartado 1, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.

Es decir, ex artículo 9.2.j) RGPD **la prohibición de tratar datos sensibles no aplicará cuando sea necesario para fines estadísticos, pero no de cualquier manera sino de conformidad con el artículo 89.1 RGPD, y sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados Miembros**, lo que en el caso que nos ocupa nos conduce en primer lugar a la aplicación del artículo 25.2 de la LOPDGDD, por el que se dispone que (el subrayado es nuestro):

2. La comunicación de los datos a los órganos competentes en materia estadística solo se entenderá amparada en el artículo 6.1 e) del [Reglamento \(UE\) 2016/679](#) en los casos en que la estadística para la que se requiera la información venga exigida por una norma de Derecho de la Unión Europea o se encuentre incluida en los instrumentos de programación estadística legalmente previstos.

De conformidad con lo dispuesto en el [artículo 11.2 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo](#), de la Función Estadística Pública, serán de aportación estrictamente voluntaria y, en consecuencia, solo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los afectados los datos a los que se refieren los artículos 9 y 10 del [Reglamento \(UE\) 2016/679](#).

Por mor de lo cual, el artículo 25 LOPDGDD remite a la legislación especial aplicable en materia estadística, disponiendo el citado artículo 11 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de Función Estadística Pública, que (el subrayado es nuestro):

1. Cuando los servicios estadísticos soliciten datos, deberán proporcionar a los interesados información suficiente sobre la naturaleza, características y finalidad de la estadística, advirtiéndoles, además, de si es o no obligatoria la colaboración, de la protección que les dispensa el secreto estadístico, y de las sanciones en que, en su caso, puedan incurrir por no colaborar o por facilitar datos falsos, inexactos, incompletos o fuera de plazo.

2. En todo caso, serán de aportación estrictamente voluntaria y, en consecuencia, sólo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los interesados los datos susceptibles de revelar el origen étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o ideológicas y, en general, cuantas circunstancias puedan afectar a la intimidad personal o familiar.

Mutatis mutandis, el informe justificativo que se adjunta en esta consulta considera que concurriría la circunstancia establecida en el artículo 9.2.i) RGPD, sin ser necesario en este caso haber recabado previamente el consentimiento del interesado porque el artículo 41.2 de la Ley 33/2011, de la Ley General de Salud Pública, permitiría entender levantada la prohibición general de tratar datos de salud. **Este**

Servicio Jurídico considera oportuno anticipar en este momento su discrepancia respecto de dicha consideración.

El citado artículo 9.2.i) dispone que: *el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional.*

Por consiguiente, al igual que ocurría en el caso anterior analizado en relación con el levantamiento de la prohibición de tratar datos sensibles para fines estadísticos, el levantamiento de la prohibición de tratar tales datos sensibles tampoco se produce de manera automática cuando sea necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, **sino que deberá producirse sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados Miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional.**

Sucediendo, en el supuesto presente, que el artículo 41.2 de la Ley 33/2011, de la Ley General de Salud Pública, establece que: *2. Las Administraciones sanitarias no precisarán obtener el consentimiento de las personas afectadas para el tratamiento de datos personales, relacionados con la salud, así como su cesión a otras Administraciones públicas sanitarias, cuando ello sea estrictamente necesario para la tutela de la salud de la población.*

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra “estricto” como estrecho, ajustado enteramente a la necesidad o a la ley y que no admite interpretación; asimismo, define la palabra “necesario” como algo que hace falta indispensablemente para algo, y también como algo que se hace y ejecuta obligado por otra cosa, como opuesto a voluntario y espontáneo. En consecuencia, por “estrictamente necesario” debe entenderse aquello que es absolutamente indispensable para lograr el fin específico que se persigue, sin lo cual dicho fin no podría alcanzarse o se vería gravemente obstaculizado. Sin embargo, dicha circunstancia no ha quedado acreditada en el supuesto sometido a esta consulta; es más, por el contrario, ha quedado acreditado de manera notoria y pacífica que la encuesta que se desea realizar no forma parte del Plan Estadístico Nacional, es decir, no es de realización ni de cumplimentación obligatoria, no siendo posible, como venimos explicando, considerar estrictamente necesario algo que es claramente voluntario.

Sin perjuicio de ostentar el Ministerio de Sanidad competencias para la realización de estadísticas y estudios para fines estatales en materia sanitaria (artículo 55.1 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud), la comunicación de *datos de salud* a los servicios estadísticos resulta de

aportación estrictamente voluntaria incluso cuando se trate de estadísticas realizadas por los servicios estadísticos oficiales, debiendo recogerse previamente el consentimiento expreso de los afectados para poder realizar el tratamiento de estos datos, tal y como resulta del artículo 11.2 LFPE, cuya aplicación por razones de especialidad resulta preferente en atención a la finalidad estadística del tratamiento que se desea realizar.

Dicho de otro modo, **la previsión contenida en el referido artículo 41.2 no habilita el levantamiento de la prohibición de tratar datos sensibles, en primer lugar porque no concurre el supuesto de hecho previsto en ella (ser estrictamente necesario para la tutela de la salud de la población), y en segundo lugar porque por virtud del principio de especialidad normativa resulta aplicable con carácter preferente el artículo 11 LFPE, que establece que “en todo caso” serán de aportación voluntaria y solo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los interesados los datos especialmente protegidos.** Precepto que resulta aplicable pese a no encontrarnos ante una estadística oficial para fines estatales, dado que habiendo previsto el legislador el carácter eminentemente voluntario del tratamiento de datos personales sensibles incluso tratándose de encuestas oficiales para fines estatales, no cabría rebajar la protección de dichos datos sensibles cuando se tratara de las encuestas que ni siquiera tienen dicho carácter.

Por lo expuesto, el análisis planteado por el Delegado de Protección de datos consultante acerca de la necesidad de valorar la adecuación o no del artículo 41.2 de la Ley 33/2011, de la Ley General de Salud Pública, a las exigencias y garantías específicas previstas por la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poder entender satisfecha la reserva legal existente en materia de derechos fundamentales y expuesta de manera reiterada en los informes de este Servicio Jurídico, no resulta procedente al no ser la ley aplicable a este supuesto por las razones que acaban de ser expuestas.

IV

Pasando en siguiente lugar a analizar la posibilidad de que una norma con rango de ley estableciera las medidas y garantías adecuadas (tal y como se hace en determinadas circunstancias y con sujeción a garantías específicas en la Ley de Bases de Régimen Local, a efectos del Padrón, y en la Ley de Telecomunicaciones, a efectos del número de teléfono), para permitir la cesión de datos para su uso exclusivo para encuestas realizadas por las AAPP para fundamentar la toma de decisiones en materia de salud procedería, ahora sí, traer a colación la doctrina jurisprudencial existente acerca de las garantías y exigencias que debería contener dicha norma legal para que pudiera considerarse respetada la reserva legal existente en materia de derechos fundamentales, doctrina reiterada de manera constante en los informes de

este Servicio Jurídico, de los que traemos a colación, a modo de ejemplo, un extracto de nuestro informe número 47/2024:

“En primer lugar, debe partirse de la naturaleza reglamentaria del proyecto informado y de la vigencia, en relación con las limitaciones al derecho fundamental de protección de datos personales, del principio de reserva de ley exigido por el artículo 53.1 de la Constitución y el artículo 8 de la LOPDGDD, que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, requiere, por un lado, la necesaria intervención de la ley para habilitar la injerencia; y, por otro lado, esa norma legal “ha de reunir todas aquellas características indispensables como garantía de la seguridad jurídica”, esto es, “ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención” (STC 49/1999, FJ 4). En otras palabras, “no sólo excluye apoderamientos a favor de las normas reglamentarias [...], sino que también implica otras exigencias respecto al contenido de la Ley que establece tales límites” (STC 292/2000, FJ 15). Además, dicha ley deberá respetar en todo caso el principio de proporcionalidad, tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2003, de 28 de enero.

*En este sentido, la importante **sentencia 292/2000 de 30 de noviembre** señala, en su Fundamento Jurídico 14, y se pronuncia respecto del alcance de las normas reglamentarias en los siguientes términos:*

14. Pese a la importancia que para garantizar el ejercicio del derecho fundamental poseen los derechos del interesado a ser informado y a consentir la cesión de sus datos personales, como antes se ha declarado, sin embargo, es suficiente según el art. 21.1 LOPD [norma cuya constitucionalidad se estaba discutiendo en el proceso ante el TC] que la comunicación de tales datos entre Administraciones Públicas, para el ejercicio de competencias diferentes o que versen sobre materias distintas, sea autorizada por una norma reglamentaria. Al respecto, ya hemos dicho [STC 127/1994, FJ 5, con remisión a la STC 83/1984, FJ 4, y 99/1987, FJ 3 a)] que incluso en los ámbitos reservados por la Constitución a la regulación por Ley no es imposible una intervención auxiliar o complementaria del Reglamento, pero siempre que estas remisiones restrinjan efectivamente el ejercicio de esa potestad reglamentaria a un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia Ley. De tal modo que esa remisión no conlleve una renuncia del legislador a su facultad para establecer los límites a los derechos fundamentales, transfiriendo esta facultad al titular de la potestad reglamentaria, sin fijar ni siquiera cuáles son los objetivos que la reglamentación ha de perseguir, pues, en tal caso, el legislador no haría sino “deferir a la normación del Gobierno el objeto mismo reservado” (STC 227/1993, de 9 de julio, FJ 4, recogiendo la expresión de la STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 14).

La remisión a la regulación reglamentaria de materia ligada a la reservada a la Ley es preciso, pues, que se formule en condiciones tales que no contraría materialmente la finalidad de la reserva, de la cual se derivan, según la STC 83/1984, "ciertas exigencias en cuanto al alcance de las remisiones o habilitaciones legales a la potestad reglamentaria, que pueden resumirse en el criterio de que las mismas sean tales que restrinjan efectivamente el ejercicio de esa potestad a un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia Ley". Es en este segundo plano en el que se encuentra el núcleo argumental del recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo que es acogido en esta Sentencia, el cual considera que al establecer el art. 21.4 LOPD que esas cesiones no requieren del previo consentimiento del afectado permite al reglamento imponer un límite al derecho fundamental a la protección de datos personales, que como se ha dicho ya, defrauda la previsión del art. 53.1 de la Constitución (STC 101/1991, de 13 de mayo, FJ 3).

El artículo 6.1 del RGPD considera que un tratamiento es lícito cuando cumpla al menos una serie de supuestos, entre los que cabe aquí destacar los siguientes:

- c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento"*
- e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento".*

La norma proyectada hace referencia, precisamente, a estos supuestos como base jurídica de legitimación en la disposición adicional primera del reglamento sometido a informe, denominada "Tratamientos de datos de carácter personal".

Asimismo, el apartado 3 del citado artículo 6 RGPD, ahonda en los requisitos legales de la norma que dé cobertura al tratamiento y propone elementos que pondrán ser tenidos en cuenta en dicha regulación, al indicar que:

3. La base del tratamiento indicado en el apartado 1, letras c) y e), deberá ser establecida por: a) el Derecho de la Unión, o b) el Derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento. La finalidad del tratamiento deberá quedar determinada en dicha base jurídica o, en lo relativo al tratamiento a que se refiere el apartado 1, letra e), será necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Dicha base jurídica podrá contener disposiciones específicas para adaptar la aplicación de normas del presente Reglamento, entre otras: las condiciones generales que rigen la licitud del tratamiento por parte del responsable; los tipos de datos objeto de

tratamiento; los interesados afectados; las entidades a las que se pueden comunicar datos personales y los fines de tal comunicación; la limitación de la finalidad; los plazos de conservación de los datos, así como las operaciones y los procedimientos del tratamiento, incluidas las medidas para garantizar un tratamiento lícito y equitativo, como las relativas a otras situaciones específicas de tratamiento a tenor del capítulo IX. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros cumplirá un objetivo de interés público y será proporcional al fin legítimo perseguido.

El Considerando 45 del RGPD señala que “Cuando se realice en cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, o si es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, el tratamiento debe tener una base en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.”

Por su parte la LOPDGDD establece en su artículo 8, bajo la denominación “Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos”, lo siguiente:

- 1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.*
- 2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.*

A estos requisitos, referidos en general a cualesquiera tratamientos de datos personales (sean o no estos datos pertenecientes a categorías especiales) debemos añadir los exigidos para poder someter a tratamiento datos personales incluidos en dichas categorías especiales.

Es decir, respecto de estas categorías especiales de datos personales, el art. 9.1 RGPD, y el art. 9.1 LOPDGDD prohíben su tratamiento. Se prevén sin embargo determinados requisitos que permiten levantar dicha prohibición de tratamiento a la que hace referencia el apartado 1 del citado artículo 9 del RGPD, para lo que

debemos aplicar alguna de las excepciones que se recogen en el apartado 2 del citado precepto. Debiendo destacarse aquí los apartados h) e i):

h) el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3;

i) el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional.

Como puede observarse, en ambos apartados exigen el establecimiento de garantías y medidas específicas y adecuadas por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, es decir, vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que dichos supuestos estén basados en la ley, a lo que hay que añadir la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional contenida en la Sentencia 76/2019, de 22 de mayo respecto de la norma en la que deben recogerse dichas garantías (F.J.8):

*(...) La previsión de las garantías adecuadas no puede deferirse a un momento posterior a la regulación legal del tratamiento de datos personales de que se trate. Las garantías adecuadas deben estar incorporadas a la propia regulación legal del tratamiento, ya sea directamente o por remisión expresa y perfectamente delimitada a fuentes externas que posean el rango normativo adecuado. (...). Según reiterada doctrina constitucional, **la reserva de ley no se limita a exigir que una ley habilite la medida restrictiva de derechos fundamentales, sino que también es preciso**, conforme tanto a exigencias denominadas –unas veces– de predeterminación normativa y –otras– de calidad de la ley como al respeto al contenido esencial del derecho, **que en esa regulación el legislador, que viene obligado de forma primaria a ponderar los derechos o intereses en pugna, predetermine los supuestos, las condiciones y las garantías en que procede la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales**. Ese mandato de predeterminación respecto de elementos esenciales, vinculados también en último término al juicio de proporcionalidad de la limitación del derecho fundamental, no puede quedar deferido a un ulterior desarrollo legal o reglamentario, ni tampoco se puede dejar en manos de los propios particulares. (...)*

De manera más extensa, y como ya ha venido recordando esta AEPD reiteradamente en sus informes:

[...] debe tenerse igualmente en cuenta que, en el caso de que la obligación venga impuesta por una norma de derecho interno, **la misma deberá tener rango de ley**, por exigirlo el artículo 53.1 de la Constitución, tal y como expresamente recoge el artículo 8.1 de la LOPDGDD, añadiendo que “podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo, así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679” y deberá tenerse en cuenta la doctrina constitucional recogida, fundamentalmente, en las sentencias 292/2000 de 30 noviembre y 76/2019 de 22 de mayo, conforme a **la cual los límites al derecho fundamental a la protección de datos personales deben establecerse por una norma con rango de ley**, previa ponderación por el legislador de los intereses en pugna atendiendo al principio de proporcionalidad, definiendo todos y cada uno de los presupuestos materiales de la medida limitadora mediante reglas precisas, que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias, y estableciendo las garantías adecuadas, siendo la propia ley la que habrá de contener las garantías adecuadas frente a la recopilación de datos personales que autoriza. El Tribunal Constitucional (TC) ha sido claro en cuanto a que la previsión de las garantías adecuadas no puede deferirse a un momento posterior a la regulación legal del tratamiento de datos personales de que se trate. **Las garantías adecuadas deben estar incorporadas a la propia regulación legal del tratamiento, ya sea directamente o por remisión expresa y perfectamente delimitada a fuentes externas que posean el rango normativo adecuado.** Solo ese entendimiento es compatible con la doble exigencia que dimana del artículo 53.1 CE (...). Es evidente que, si la norma incluyera una remisión para la integración de la ley con las garantías adecuadas establecidas en normas de rango inferior a la ley, sería considerada como una deslegalización que sacrifica la reserva de ley ex artículo 53.1 CE, y, por este solo motivo, debería ser declarada inconstitucional y nula. (...). Se trata, en definitiva, de “garantías adecuadas de tipo técnico, organizativo y procedimental, que prevengan los riesgos de distinta probabilidad y gravedad y mitiguen sus efectos, pues solo así se puede procurar el respeto del contenido esencial del propio derecho fundamental”. Tampoco sirve por ello que para el establecimiento de dichas garantías adecuadas y específicas la ley se remita al propio RGPD o a la LOPDGDD.

Además, dicha ley deberá respetar en todo caso el principio de proporcionalidad, tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2003, de 28 de enero:

“En otras palabras, de conformidad con una reiterada doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan basta con recordar que, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto; SSTC 66/1995, de 8 de mayo [RTC 1995, 66] , F. 5; 55/1996, de 28 de marzo [RTC 1996, 55] , FF. 7, 8 y 9; 270/1996, de 16 de diciembre [RTC 1996, 270] , F. 4.e; 37/1998, de 17 de febrero [RTC 1998, 37] , F. 8; 186/2000, de 10 de julio [RTC 2000, 186] , F. 6).”

La misma doctrina sostiene el **Tribunal de Justicia de la Unión Europea** (TJUE). Así, si el art. 8 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales reconoce el derecho de toda persona a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan, el art. 52.1 reconoce que ese derecho no es ilimitado y permite la limitación del ejercicio de esos derechos y libertades reconocidos por la Carta, limitación que deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de los mismos.

Pues bien, la **STJUE de 6 de octubre de 2020**, en los casos acumulados C-511/18, C-512/18 y C-520/18, La Quadrature du Net y otros, en su apartado 175, recuerda que:

En cuanto a la justificación de dicha injerencia, cabe precisar que el requisito, previsto en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que la permita debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Facebook Ireland y Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, apartado 175 y jurisprudencia citada).

Igualmente, el apartado 65 de la **Sentencia (STJUE) de la misma fecha 6 de octubre de 2020 (C-623/17)**, Privacy International contra Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs y otros, con cita, como la anterior, de la sentencia Schrems 2, dice:

Cabe añadir que el requisito de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal

que permita la injerencia en dichos derechos debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate (sentencia de 16 de julio de 2020, Facebook Ireland y Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, apartado 175 y jurisprudencia citada).

En definitiva, el apartado 175 de la STJUE de 16 de julio de 2020, C-311/2020, Schrems 2, dice: Cabe añadir, sobre este último aspecto, que el requisito de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que permita la injerencia en dichos derechos debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate [dictamen 1/15 (Acuerdo PNR UE-Canadá), de 26 de julio de 2017, EU:C:2017:592, apartado 139 y jurisprudencia citada].

Es pues, la misma ley que establece la injerencia en el derecho fundamental la que ha de determinar las condiciones y garantías, esto es, el alcance y la limitación, que han de observarse en dichos tratamientos.

*Y en dicha **STJUE de 16 de julio de 2020**, Schrems 2, se añade (y se reitera posteriormente en las citadas sentencias de 6 de octubre de 2020):*

176 Finalmente, para cumplir el requisito de proporcionalidad según el cual las excepciones a la protección de los datos personales y las limitaciones de esa protección no deben exceder de lo estrictamente necesario, la normativa controvertida que conlleve la injerencia debe establecer reglas claras y precisas que regulen el alcance y la aplicación de la medida en cuestión e impongan unas exigencias mínimas, de modo que las personas cuyos datos se hayan transferido dispongan de garantías suficientes que permitan proteger de manera eficaz sus datos de carácter personal contra los riesgos de abuso. En particular, dicha normativa deberá indicar en qué circunstancias y con arreglo a qué requisitos puede adoptarse una medida que contemple el tratamiento de tales datos, garantizando así que la injerencia se limite a lo estrictamente necesario. La necesidad de disponer de tales garantías reviste especial importancia cuando los datos personales se someten a un tratamiento automatizado

La ya citada STJUE de 6 de octubre de 2020, en el caso C-623/17, añade la mención de las categorías especiales de datos:

68 (...) Estas consideraciones son aplicables en particular cuando está en juego la protección de esa categoría particular de datos personales que son los datos sensibles [véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland y otros, C-293/12 y C-594/12, EU:C:2014:238, apartados 54 y 55, y de 21 de diciembre de 2016, Tele2, C-203/15 y C-698/15, EU:C:2016:970, apartado 117; dictamen 1/15 (Acuerdo PNR UE-Canadá), de 26 de julio de 2017, EU:C:2017:592, apartado 141].

*En consecuencia, **los límites al derecho fundamental a la protección de datos personales deben establecerse por una norma con rango de ley, previa ponderación por el legislador de los intereses en pugna atendiendo al principio de proporcionalidad, definiendo todos y cada uno de los presupuestos materiales de la medida limitadora mediante reglas precisas, que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias, y estableciendo las garantías adecuadas.***

V

Llegados a este punto, visto que el Ordenamiento Jurídico actualmente vigente no permite a la Conselleria valenciana ceder sus datos de salud al Ministerio de Sanidad (concretamente al CCAES) para la realización de estadísticas (ya sean obligatorias o voluntarias), siendo indispensable en todo caso el consentimiento previo y expreso de los interesados (ex artículo 11 LFPE), resulta procedente indagar la existencia o no de otras vías legales que pudieran permitir la comunicación de datos de contacto (no especialmente protegidos) a efectos de la realización de posteriores estadísticas.

Estas posibilidades han sido apuntadas por el DPD consultante, y son las que resultan en primer lugar, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuyo artículo 16 dispone que:

*1. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. **Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo.** Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.*

La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración, no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea, a Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados anteriormente.

El transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado.

2. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos.

b) Sexo.

c) Domicilio habitual, con especificación de la referencia catastral, en el territorio fiscal común o el código equivalente en los territorios forales, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente.

d) Nacionalidad.

e) Lugar y fecha de nacimiento.

f) Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros:

1.º Número de identidad de extranjero que conste en el certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros expedido por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados.

2.º Número de identidad de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de estos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el párrafo anterior, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado.

g) Certificado o título escolar o académico que se posea.

h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en [la Constitución Española](#).

Asimismo, de conformidad con la [Ley 39/2015, de 1 de octubre](#), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inscripción en el Padrón municipal podrá recoger la aportación voluntaria de los datos relativos a la designación de las personas que pueden representar a cada vecino ante la administración municipal a efectos padronales, el número de teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico.

3. Los datos obligatorios del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. Los datos de aportación voluntaria no serán susceptibles de cesión en ningún caso.

El alcance de esta previsión ha sido estudiado del modo que sigue, entre otros, en nuestro informe número 357547/2017:

“Este artículo fue extensamente interpretado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 17/2013, de 31 de enero de 2013, en la que determinó la constitucionalidad del mismo. De la misma cabrá extraer por tanto los requisitos para que la cesión planteada sea conforme a la normativa de protección de datos, único aspecto sobre el que ha de versar esta consulta.

Tal y como ha sido interpretado por el TC en dicha sentencia (FJ 8), este precepto se refiere a la cesión no consentida de los datos relativos a la residencia o el domicilio a otras Administraciones públicas que así lo soliciten solamente en aquellos casos en los que, para el ejercicio de sus competencias, sean aquellos datos relevantes. En suma, esta petición, que no se refiere específicamente a la cesión de datos del padrón en lo concerniente a los datos de los extranjeros, tiene por finalidad poder disponer de los datos relativos a la residencia o el domicilio que constan en el padrón municipal, (...). De esta forma, de acuerdo con la Ley Orgánica de protección de datos, la finalidad inicial que justificó la recogida de los datos por parte de una Administración pública no impide el destino posterior de los datos para su uso en finalidades diferentes de aquellas que motivaron su recogida respetando, en todo caso, el principio de reserva de ley para establecer dicho cambio, (...) la Ley de bases de régimen local en su condición, además, de norma reguladora de un fichero como el padrón municipal puede prever cesiones de datos entre Administraciones públicas.

*(...) los datos cedidos han de ser los **estrictamente necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas a los órganos administrativos de forma que deberá motivarse la petición de aquellos datos que resulten relevantes**, pues es necesario distinguir entre el análisis y seguimiento de una situación individualizada relativa a un caso concreto y el suministro generalizado e indiscriminado de toda la información contenida en un registro personal. El precepto ha contemplado ambos extremos de manera que cualquier cesión de los datos del padrón debe fundamentarse en la necesidad por parte de la **Administración cesionaria actuando en el ejercicio de sus competencias, de conocer, en cada caso concreto, el dato relativo al domicilio de la persona afectada**, extremos que*

han de ser adecuadamente valorados por la cedente a fin de apreciar si los datos que se solicita son realmente necesarios, pertinentes y proporcionados, atendiendo a la competencia que pretende ejercer la Administración cesionaria (art. 4 in fine de la Ley 30/1992). Se trata así de una regla de por sí restringida a los datos relativos a la residencia y al domicilio en cada caso concreto, y a la que le resultarán de aplicación, de más está decirlo, el resto de principios y previsiones que conforman el contenido del derecho reconocidos en la legislación sobre protección de datos.

*De lo anteriormente transcrito, y del resto de la fundamentación jurídica contenida en dicha sentencia resulta que el TC ha determinado que **(i) habrá de evitarse el acceso indiscriminado y masivo a los datos personales (ii) el dato en cuestión solicitado habrá de ser pertinente y necesario (iii) para la finalidad establecida en el precepto (iv) la solicitud de acceso a los concretos datos personales habrá de motivarse y justificarse expresamente, (v) de manera que ello posibilite su control por el cedente (vi) y se evite un uso torticero de esa facultad con accesos masivos. Ello supone (vii) que ha de quedar garantizada la posibilidad de analizar si en cada caso concreto el acceso tenía amparo en lo establecido en la ley (art. 16.3 LBRL).***

Comoquiera que el artículo 16.3 LBRL establece que la comunicación de los datos de carácter obligatorio del Padrón podrán cederse a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de sus competencias, la comunicación de tales datos podría encontrar base jurídica en el artículo 6.1.c) en cuanto a las Administraciones cedentes de los datos, dado que se estarían comunicando a otras Administración Pública para el ejercicio de sus competencias, i.e. la realización de tomas de contacto con el fin de realizar las encuestas, volviéndose a recordar la necesidad de reforzar la justificación de la competencia del CCAES para realizarlas; lo que a su vez, podría dar lugar a que la comunicación al CCAES encontrara su fundamento jurídico en el artículo 6.1.e) RGPD (“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”); todo ello siempre que la comunicación se adecuara a los principios de limitación de la finalidad y minimización de datos del artículo 5, así como a la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, recogida entre otras, en su Sentencia 17/2013, de 31 de enero, contraria a un acceso masivo e indiscriminado de datos personales en los supuestos de cesiones entre Administraciones Públicas.

VI

Pasando en último lugar al análisis de los números de teléfono, esta Agencia ha tenido ocasión de pronunciarse, con anterioridad, en numerosas ocasiones sobre consultas relativas al suministro de los números de teléfono que se encuentren en poder de la CNMC, en las que esta Agencia había venido insistiendo en relación con la comunicación de números de teléfono a los servicios estadísticos oficiales en la necesidad de impulsar la correspondiente modificación legislativa que garantizase la seguridad jurídica y la adecuación de estos tratamientos de datos personales al RGPD y a la doctrina del Tribunal Constitucional, mediante el establecimiento de las garantías

específicas que se estimasen adecuadas. A modo de ejemplo de los hasta aquí expuesto traemos a colación un extracto de nuestro informe número 22/2022:

“ Esta Agencia ha tenido ocasión de pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre el mismo objeto de la consulta nuevamente planteada, en relación con la comunicación al CIS de los números de teléfono que se encuentran en poder de la CNMC, siendo la más reciente el Informe 1/2022, en el que se tuvo en cuenta la modificación introducida en el artículo 49.1. in fine de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, llevada a cabo por la disposición final segunda de la Ley 15/2021, de 23 de octubre y en el que se recogía el criterio de esta Agencia, que por su importancia se transcribe a continuación:

I

La consulta formulada parte de la modificación introducida en el artículo 49.1. in fine de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, llevada a cabo por la disposición final segunda de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

Dicha disposición final fue introducida en virtud de enmienda durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, por lo que no pudo ser objeto del informe que, con carácter preceptivo, hubiera debido emitir esta Agencia al correspondiente anteproyecto de ley.

En virtud de dicha disposición, se ha modificado el apartado 1 del artículo 49 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, que ha pasado a tener la siguiente redacción, en vigor desde el 14 de noviembre de 2021:

«1. La elaboración y comercialización de las guías de abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas y la prestación de los servicios de información sobre ellos se realizará en régimen de libre competencia.

A tal efecto, las empresas que asignen números de teléfono a los abonados habrán de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de información pertinente para la prestación de los servicios de información sobre números de abonados y guías accesibles al público, en un formato aprobado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en función de los costes y no discriminatorias, estando sometido el suministro de la citada información a su posterior utilización en la normativa en materia de protección de datos vigente en cada momento.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá suministrar gratuitamente a las entidades que vayan a elaborar guías telefónicas de abonados, a las que presten el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado, a las que presten los servicios de llamadas de emergencia y a los servicios estadísticos

oficiales para la elaboración de encuestas y el desarrollo de las competencias estadísticas que la Ley les confiere, los datos que le faciliten los operadores, de conformidad con las condiciones que se establezcan mediante real decreto.

La cesión de estos datos en favor de los servicios estadísticos oficiales deberá basarse en los principios recogidos en la normativa de protección de datos y, especialmente, en los de minimización y limitación de la finalidad.»

Con carácter previo al análisis de la concreta cuestión planteada, debe resaltarse que, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, esta Agencia se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la comunicación de los números de teléfono de los abonados al servicio telefónico para la realización de encuestas por diferentes servicios estadísticos oficiales, dada la situación excepcional derivada de la pandemia y de las restricciones derivadas de la misma que impedían la realización de las encuestas de forma presencial.

*En relación con la cuestión relativa a la comunicación por la CNMC de los números de teléfono para la realización de encuestas por el CIS, el criterio que había venido manteniendo esta Agencia es el de la necesidad de adoptar garantías adicionales, al tratarse de un tratamiento de datos para una finalidad distinta en el que concurre la singularidad de tratarse de encuestas de cumplimentación voluntaria, dado el tipo de datos personales que se tratan, incluidos dentro de las categorías especiales de datos (como son, por ejemplo, los relativos a las opiniones políticas), lo que diferencia estos tratamientos de los realizados por otros servicios estadísticos oficiales en los que la cumplimentación es obligatoria. En este sentido nos pronunciamos en el informe 78/2020, referido a una encuesta a realizar por los servicios estadísticos del Ministerio de Cultura y Deporte, reiterado posteriormente en el Informe 91/2020 relativo a una consulta de la CNMC sobre una nueva solicitud del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) relativa al suministro de determinados números telefónicos de abonados para la realización de distintos estudios incluidos en el Plan Estadístico Nacional, así como para realizar otros estudios y encuestas de su competencia, recogiendo dicho criterio delimitador: **«Y al tratarse de un estadística de cumplimentación obligatoria, existe una obligación legal de los ciudadanos previamente seleccionados en la muestra de la encuesta de facilitar la información solicitada, tipificándose en el artículo 50 de la Ley 12/1989 como infracción leve “La remisión o el retraso en el envío de datos cuando no hubiere causado perjuicio grave para el servicio, y hubiere obligación de suministrarlos”, como infracción grave “La no remisión o el retraso en el envío de los datos requeridos cuando se produjese grave perjuicio para el servicio, y hubiere obligación de suministrarlos” y como infracción muy grave “La resistencia notoria, habitual o con alegación de excusas falsas en el envío de los datos requeridos, cuando hubiere obligación de suministrarlos”.***

Precisamente es la obligatoriedad en la cumplimentación de la encuesta la que permite diferenciar este supuesto de aquellos otros en los que la misma es voluntaria, como son las realizadas por el Centro de Investigaciones

Sociológicas, ya que, al implicar el tratamiento de categorías especiales de datos, el artículo 5 de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas recoge el principio de voluntariedad de las respuestas, lo que exige que, en el caso de pretenderse la comunicación de los números de teléfono por parte de la CNMC al CIS, deban adoptarse garantías adicionales, tal y como se analiza en el Informe 49/2020.

Por lo tanto, en el presente caso, la comunicación de los datos de los abonados al servicio telefónico por parte de la CNMC para la elaboración de una estadística oficial, de cumplimentación obligatoria, incluida en el Plan Estadístico Nacional y ejecutada por los servicios estadísticos del Estado encontraría su fundamento en el artículo 6.1.e) del RGPD (“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”)).

Y, en virtud de dicha argumentación, el citado informe 91/2020 concluía lo siguiente: Por todo ello, esta Agencia se reitera en los criterios expuestos, de modo que para que proceda la comunicación de los números de teléfono de los abonados que están en poder de la CNMC al CIS deberán adoptarse garantías adicionales, similares a las previstas en el informe 49/2020.

Asimismo, esta Agencia insiste en la necesidad, ya indicada en los informes anteriores, de que se impulse la correspondiente modificación legislativa que garantice la seguridad jurídica y la adecuación de los correspondientes tratamientos de datos personales al RGPD y a la doctrina del Tribunal Constitucional, mediante el establecimiento de las garantías específicas que se estimen adecuadas.

En el Informe 49/2020, referido a las elecciones a celebrar en Galicia y País Vasco, los garantías adicionales identificadas tras una reunión mantenida con representantes del CIS y su Delegado de Protección de Datos, fueron las siguientes:

- solo se accederá a los datos correspondientes al número de teléfono móvil y la provincia a la que se corresponde, sin facilitarse ningún otro dato identificativo.*
- no se incluirán en la relación que se facilite por la CNMC los números de teléfono de aquellas personas que hayan ejercitado su derecho a no figurar en las guías accesibles al público.*
- no serán objeto de tratamiento la totalidad de los números de teléfonos de los abonados de la provincia, sino únicamente el porcentaje que se estima adecuado para garantizar que se ajusta a la muestra correspondiente, porcentaje que, en función de la Comunidad Autónoma, oscilaría entre el 5,1 % y el 6,3% de su población, a distribuir proporcionalmente por provincia, de acuerdo con su población, que serán seleccionados de manera aleatoria.*
- los teléfonos obtenidos solo se conservarán durante el tiempo necesario para la realización del trabajo de campo y, en su caso, durante el tiempo necesario para la*

realización del control de calidad posterior, hasta un máximo de treinta días, procediéndose posteriormente a su eliminación.

Asimismo, habría que añadir el resto de garantías propias del ejercicio de la función estadística, como el sometimiento al secreto. Por otro lado, en los distintos informes emitidos en relación con la comunicación de números de teléfono a los servicios estadísticos oficiales, esta Agencia ha insistido reiteradamente en la necesidad de que se impulse la correspondiente modificación legislativa que garantice la seguridad jurídica y la adecuación de los correspondientes tratamientos de datos personales al RGPD y a la doctrina del Tribunal Constitucional, mediante el establecimiento de las garantías específicas que se estimen adecuadas. Asimismo, esta observación se ha reiterado en el Informe 46/2021, referente al Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones”.

Este mismo informe número 22/2022 continúa analizando el impacto de la modificación legislativa que se había producido por la disposición final segunda de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se dio nueva redacción al artículo 49.1 de la Ley General de Telecomunicaciones, incluyendo entre los supuestos en los que existía la obligación de comunicar los datos que figurasen en las guías telefónicas de abonados, a los servicios estadísticos oficiales, en los siguientes términos: “[...] La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá suministrar gratuitamente a las entidades que vayan a elaborar guías telefónicas de abonados, a las que presten el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado, a las que presten los servicios de llamadas de emergencia **y a los servicios estadísticos oficiales para la elaboración de encuestas y el desarrollo de las competencias estadísticas que la Ley les confiere**, los datos que le faciliten los operadores, de conformidad con las condiciones que se establezcan mediante real decreto.

La cesión de estos datos en favor de los servicios estadísticos oficiales deberá basarse en los principios recogidos en la normativa de protección de datos y, especialmente, en los de minimización y limitación de la finalidad”.

Como venimos comentando el citado informe número 22/2022 analiza la inclusión de este nuevo supuesto de comunicación de datos de teléfono de los abonados a los servicios estadísticos oficiales para la elaboración de encuestas y el desarrollo de las competencias estadísticas que la ley les confiere en los siguientes términos:

“IV

Por consiguiente, hasta la modificación legal operada por la Ley 15/2021, de 23 de octubre, el artículo 49.1. LGTel únicamente contemplaba, por un lado, la comunicación de los datos de los abonados a las entidades que vayan a elaborar guías telefónicas de abonados y a las que presten el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado, con el fin de garantizar la

libre competencia, supeditada, en todo caso, a que los afectados no hubiesen ejercido su derecho a no figurar en las guías; y, por otro lado, a los servicios de emergencia, con el fin de garantizar la adecuada gestión de la misma y la protección de los intereses vitales del afectado o de un tercero, prevaleciendo, en este caso, dicha protección frente a la posible oposición del afectado a figurar en las guías. Por consiguiente, siendo la regla general la de la prevalencia del derecho a no figurar en las guías, en el caso de las llamadas de emergencia prevalece el interés vital, y en este sentido debe entenderse la previsión del artículo 68.2 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril:

Los datos referentes a los abonados que hubieran ejercido su derecho a no figurar en las guías accesibles al público únicamente se proporcionarán a las entidades titulares del servicio de atención de llamadas de emergencia. A estos efectos, se entenderá que los servicios de llamadas de emergencia son los prestados a través del número 112 y aquellos otros que determine la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Tras la modificación legal, se ha introducido un nuevo supuesto en el que deberá procederse a la comunicación de los datos de los abonados: “a los servicios estadísticos oficiales para la elaboración de encuestas y el desarrollo de las competencias estadísticas que la Ley les confiere”. En este caso, dicha comunicación, amparada en una obligación legal, encuentra su fundamento en el ejercicio de sus competencias por parte de los citados servicios, por lo que el tratamiento de los datos personales por parte de estos quedaría legitimado por la letra e) del artículo 6.1. del RGPD: “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”.

*Por consiguiente, **la comunicación de datos se encontraría fundamentada, respecto de la CNMC, en la letra c) del artículo 6.1. del RGPD, y respecto del tratamiento de datos por el CIS, en la letra e).** En estos supuestos, el RGPD contiene previsiones específicas en los apartados 2 y 3 del propio artículo 6: (...)*

(...) Partiendo de las normas y de la doctrina jurisprudencial citada, esta Agencia viene señalando en sus informes más recientes la necesidad de que, por parte del legislador, al introducir regulaciones en nuestro ordenamiento jurídico que tengan especial trascendencia en los tratamientos de datos de carácter personal, se proceda previamente a un análisis de los riesgos que puedan derivarse de los mismos, incluyendo en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo un estudio sistematizado del impacto que en el derecho

fundamental a la protección de datos personales de los interesados han de tener los distintos tratamientos de datos que prevé la ley. En este sentido se han pronunciado el Informe 77/2020, relativo al Anteproyecto de Ley Orgánica de Lucha contra el Dopaje en el Deporte o el Informe 74/2020 referido al Anteproyecto de Ley de memoria democrática.

Asimismo, en dichos informes y en otros posteriores se viene incidiendo en la necesidad de que las garantías específicas que resulten de dicho análisis se recojan en el propio articulado o en una disposición adicional relativa a la protección de datos personales.

A este respecto, en los distintos informes emitidos durante la pandemia sobre la comunicación de datos de abonados a los servicios estadísticos oficiales, esta Agencia ha insistido en la necesidad de que se procediera a su regulación legal, indicando siempre la necesidad de recoger las correspondientes garantías específicas.

En el presente caso, la modificación legal ha introducido dicha modificación con dos precisiones:

Por un lado, se remite al correspondiente desarrollo reglamentario, que entre las garantías previstas contempla, en el reiteradamente citado artículo 68.2 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril que “Los datos referentes a los abonados que hubieran ejercido su derecho a no figurar en las guías accesibles al público únicamente se proporcionarán a las entidades titulares del servicio de atención de llamadas de emergencia”.

Por otro lado, incluye una mención concreta a la normativa sobre protección de datos de carácter personal al señalar que “deberá basarse en los principios recogidos en la normativa de protección de datos y, especialmente, en los de minimización y limitación de la finalidad”.

No obstante dicha previsión, se trata de un precepto muy genérico, respecto del que deben hacerse dos apreciaciones. La primera, que la aplicación de los principios recogidos en la normativa de protección de datos resulta de aplicación de manera directa conforme al RGPD, independientemente de la mención expresa que se recoge en el último párrafo del artículo 49.1 de la LGTel, en su nueva redacción. La segunda que, dada su generalidad, no pueden considerarse como garantías específicas, en los términos que viene requiriendo el Tribunal Constitucional en sus sentencias 292/2000 de 30 noviembre y 76/2019 de 22 de mayo.

Por consiguiente, esta Agencia considera que dicha remisión a la normativa sobre protección de datos personales no debe interpretarse como una exclusión de una garantía específica, el derecho a no figurar en las guías de teléfonos, que sí aparece reconocida con carácter general por la ley en su artículo 48.3. y que la propia normativa especial excluye únicamente respecto de los servicios de emergencia.

Asimismo, no resulta aplicable la interpretación que esta Agencia ha realizado respecto de las comunicaciones de datos a otros servicios estadísticos, en la que se ha admitido la inclusión de los datos de aquellos abonados que habían ejercido su derecho, y ello por dos consideraciones:

En primer lugar, porque dicha interpretación se ampara en la existencia de obligaciones específicas establecidas en una norma con rango de ley, la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, al existir una obligación legal de los afectados de suministrar los datos que les sean solicitados siendo, precisamente, la obligatoriedad en la cumplimentación de la encuesta la que permite diferenciar este supuesto de aquellos otros en los que la misma es voluntaria, como son las realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas, ya que, al implicar el tratamiento de categorías especiales de datos, el artículo 5 de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas recoge el principio de voluntariedad de las respuestas, razón por la cual esta Agencia ha venido poniendo de manifiesto que, en el caso de pretenderse la comunicación de los números de teléfono por parte de la CNMC al CIS, deberían adoptarse garantías adicionales, tal y como se analiza en el Informe 49/2020, anteriormente citado.

En segundo lugar, porque se trata de una interpretación realizada en un momento temporal excepcional, derivado de la pandemia del COVID 19 y de las restricciones derivadas del mismo, que han impedido o dificultado la posibilidad de realizarlas presencialmente, mientras que en el presente caso se trata de la interpretación de una norma que, precisamente, pretende regular estas comunicaciones de datos con carácter general y sin limitación temporal alguna.

Por consiguiente, al no haberse recogido expresamente por el legislador la comunicación a los servicios estadísticos oficiales de los datos de aquellos abonados que hubieran ejercido su derecho a no figurar en las guías, la interpretación más favorable a la protección del derecho fundamental implica entender que no procede la misma, en virtud del reconocimiento de dicho derecho como garantía específica en el artículo 48.3. de la propia ley y exceptuado, únicamente, respecto de los servicios de emergencia por el

artículo 68.2 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, sin que exista otra norma con rango de ley que permita una interpretación contraria.

De este modo, entiende esta Agencia que se estaría dando cumplimiento a la doctrina del Tribunal Constitucional que requiere que toda limitación al derecho fundamental se establezca definiendo todos y cada uno de los presupuestos materiales de la medida limitadora mediante reglas precisas, que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias, tal y como ya indicaba la Sentencia 292/2000, FJ16:

*“Más concretamente, en relación con el derecho fundamental a la intimidad hemos puesto de relieve no sólo la necesidad de que sus posibles limitaciones estén fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sean proporcionadas (SSTC 110/1984, F. 3, y 254/1993, F. 7) sino que **la Ley que restrinja este derecho debe expresar con precisión todos y cada uno de los presupuestos materiales de la medida limitadora**. De no ser así, mal cabe entender que la resolución judicial o el acto administrativo que la aplique estén fundados en la Ley, ya que lo que ésta ha hecho, haciendo dejación de sus funciones, es apoderar a otros Poderes Públicos para que sean ellos quienes fijen los límites al derecho fundamental (SSTC 37/1989, de 15 de febrero [RTC 1989, 37], y 49/1999, de 5 de abril [RTC 1999, 49]).*

*De igual modo, respecto al derecho a la protección de datos personales cabe estimar que la legitimidad constitucional de la restricción de este derecho no puede estar basada, por sí sola, en la actividad de la Administración Pública. Ni es suficiente que la Ley apodere a ésta para que precise en cada caso sus límites, limitándose a indicar que deberá hacer tal precisión cuando concorra algún derecho o bien constitucionalmente protegido. **Es el legislador quien debe determinar cuándo concurre ese bien o derecho que justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales y en qué circunstancias puede limitarse y, además, es él quien debe hacerlo mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias**. Pues en otro caso el legislador habría trasladado a la Administración el desempeño de una función que sólo a él compete en materia de derechos fundamentales en virtud de la reserva de Ley del art. 53.1 CE, esto es, establecer claramente el límite y su regulación. [...] (FJ 16)”.*

A la misma conclusión se llega aplicando otros criterios interpretativos fijados por el Tribunal Constitucional en relación con las normas limitadoras de

los derechos fundamentales, como el principio del “favor libertatis”, recogido, entre otras en la sentencia 1/1989 de 16 de enero:

*“la interpretación de los preceptos legales ha de hacerse a la luz de las normas constitucionales y especialmente aquellos que proclaman y consagran derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos **y que, en caso de duda, la interpretación que debe prevalecer es la que dota de mayor viabilidad y vigor al derecho fundamental**”.*

E, igualmente, el principio de la fuerza expansiva de los derechos requiere que todas aquellas normas que constituyan un límite a los mismos deban ser interpretadas de forma restrictiva, tal y como recuerda la Sentencia núm. 159/1986 de 12 diciembre (FJ 6):

*“Como resultado de esta interacción, la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo; **de ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable, a la eficacia y a la esencia de tales derechos**”.*

V

Como consecuencia de todo lo expuesto, esta Agencia considera que la modificación operada en el artículo 49.1. de la LGTel ampara, con carácter general y por la existencia de una obligación legal, la comunicación de los datos de los abonados a los servicios estadísticos oficiales, pero sin que se puedan incluir en la comunicación los datos de aquellos abonados que hayan ejercido su derecho a no figurar en las guías, ya que ello requeriría que el legislador lo hubiera incluido expresamente justificando adecuadamente dicha inclusión en la necesidad de adecuar los datos facilitados a las muestras previamente identificadas.

Asimismo, y conforme a la normativa y jurisprudencia citada, deberían recogerse en el texto las correspondientes garantías específicas que resulten del análisis de riesgos. En este sentido y sin ánimo exhaustivo, identificada la finalidad del tratamiento en el precepto (elaboración de encuestas y el desarrollo de las competencias estadísticas que la Ley les confiere), el cumplimiento del principio de minimización requeriría identificar los datos concretos que deben comunicarse atendiendo a dicha finalidad, así como

limitarlos a los estrictamente necesarios para la adecuada realización de la encuesta, pudiendo establecer los porcentajes de población que puedan considerarse no excesivos; el principio de limitación de la finalidad justificaría incluir la prohibición expresa de no utilizarlos en encuestas diferentes a aquella para la que se han solicitado, así como para otros fines diferentes; y el principio de limitación del plazo de conservación la de incluir un plazo para su supresión.

VI

No obstante lo anterior, en relación con la concreta solicitud de 21 de diciembre de 2021, relacionada con la reciente convocatoria de elecciones autonómicas en Castilla y León, teniendo en cuenta la modificación legal y el actual contexto de pandemia en el que se ha experimentado un incremento notable de contagios, esta Agencia considera que, con carácter excepcional, pueden suministrarse los números de los abonados que hayan ejercido su derecho a no figurar en las guías de abonados siempre que dicha comunicación se supedite a las siguientes garantías específicas, dirigidas a conciliar la efectividad de dicho derecho y la protección de los datos personales de todos los abonados con el ejercicio de las funciones públicas legalmente asignadas al CIS:

1º) Únicamente se facilitará el número de teléfono y la provincia a la que corresponde, sin facilitar ningún otro dato que permita la identificación directa de los abonados.

2º) Realizada la llamada, la obtención de otros datos de carácter personal quedará condicionada a la previa prestación del consentimiento por el afectado.

3º) Los números de teléfono de aquellas personas que no hayan prestado su consentimiento serán inmediatamente suprimidos. Los de las personas que hayan participado en la encuesta deberán suprimirse desde el momento en que no sean necesarios y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la realización de la encuesta.

4º) Los números de teléfono facilitados únicamente podrán utilizarse para la realización de la encuesta para la que han sido solicitados, no pudiendo utilizarse para la realización de otras encuestas distintas ni para ningún otro fin diferente.

En cuanto al número de teléfonos solicitado, se estima que el mismo es proporcional y conforme al principio de minimización, teniendo en cuenta que el mismo no superaría, aproximadamente, el 3,5% del censo electoral de Castilla y León.

Todo ello sin perjuicio de que, tal y como se ha indicado en el apartado anterior, deba promoverse, a la mayor brevedad, la correspondiente modificación legislativa.

II

Partiendo de los criterios manifestados por esta Agencia, procede analizar las dos cuestiones planteadas por la CNMC.

En primer lugar, como hemos señalado reiteradamente, el criterio relevante al objeto de determinar la forma en la que procederá la comunicación de los números de teléfono por parte de la CNMC no deriva de la obligatoriedad de la realización de la encuesta por el organismo público correspondiente, sino en la obligatoriedad de su cumplimentación por parte de los afectados.

En el presente caso, aun cuando el Barómetro Sanitario esté incluido en el Real Decreto 97/2022, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2022 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024, se trata de una encuesta de cumplimentación voluntaria, como lo son todas las que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas, ya que, al implicar el tratamiento de categorías especiales de datos, el artículo 5 de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas recoge el principio de voluntariedad de las respuestas.

Por consiguiente, resulta de aplicación el criterio general recogido en nuestro Informe 1/2022, de modo que la modificación operada en el artículo 49.1. de la LGTel ampara, con carácter general y por la existencia de una obligación legal, la comunicación de los datos de los abonados a los servicios estadísticos oficiales, pero sin que se puedan incluir en la comunicación los datos de aquellos abonados que hayan ejercido su derecho a no figurar en las guías, ya que ello requeriría que el legislador lo hubiera incluido expresamente justificando adecuadamente dicha inclusión y recogiendo en el texto las correspondientes garantías específicas que resulten del análisis de riesgos”.

Teniendo presente la doctrina ut supra expuesta, sostenida de manera reiterada por esta Agencia en relación con la comunicación de los datos de teléfono por parte la CNMC, resulta relevante atender a la fecha del informe ahora analizado número 22/2022 (abril de 2022), pues con posterioridad al momento de su firma se aprobó una nueva modificación legislativa, estableciendo en la actualidad el artículo 72 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, en materia de guías de abonados y servicios de información sobre números de abonado, lo que sigue:

“1. La elaboración y comercialización de las guías de abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas y la prestación de los servicios de información sobre ellos se realizará en régimen de libre competencia.

2. Los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración que asignan números de teléfono a partir de un plan de numeración habrán de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de información pertinente para la prestación de los servicios de información sobre números de abonados y guías accesibles al público, en un formato acordado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en función de los costes y no discriminatorias, estando sometidos el suministro de la citada información y su posterior utilización a la presente ley y su normativa de desarrollo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá suministrar gratuitamente los datos que le faciliten los citados operadores a las siguientes entidades:

- a) entidades que elaboren guías telefónicas de abonados;*
- b) operadores que presten el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado;*
- c) entidades que presten los servicios de llamadas de emergencia de conformidad con el artículo 74;*
- d) agentes facultados para realizar las interceptaciones que se autoricen de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.2.*
- e) los servicios estadísticos oficiales para la elaboración de encuestas y el desarrollo de las competencias estadísticas que la ley les confiere, no siendo aplicable en este caso el derecho previsto en el artículo 66.3 c). La cesión se producirá de acuerdo con los principios recogidos en la normativa de protección de datos personales y con las siguientes garantías específicas:***

1.º Se identificará en la solicitud el ámbito territorial respecto del cual se solicitan los números de teléfono.

2.º En el caso de encuestas de cumplimentación obligatoria, la solicitud y cesión de los números de teléfono deberán adecuarse a la metodología de la encuesta diseñada por el servicio estadístico oficial, de conformidad con las exigencias establecidas en la normativa reguladora de la función estadística pública.

3.º En el caso de encuestas y sondeos de cumplimentación voluntaria, la solicitud de números de teléfono no podrá referirse a un porcentaje de éstos superior al veinte por ciento de la población de dicho ámbito territorial, salvo que las características muestrales del estudio, o las dificultades para obtener una entrevista válida, exijan un porcentaje superior, debidamente justificado en la solicitud.

4.º En los supuestos de encuestas y sondeos de cumplimentación voluntaria, los números de teléfono sólo podrán ir segmentados y clasificados por las variables provincia, edad y sexo, tamaño de hábitat y situación laboral, debiendo ser en todo caso seleccionados de manera aleatoria de acuerdo con criterios estadísticos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de entre todos los disponibles en el ámbito solicitado, y debiendo ser números de teléfono anónimos no asociados al nombre del titular.

5.º Los números de teléfono cedidos son datos de contacto con los informantes y no podrán utilizarse para un fin distinto del identificado en la solicitud. Una solicitud podrá incluir, a efectos de sistematicidad, varios tratamientos independientes.

6.º Los números de teléfono cedidos de las unidades de la muestra deberán ser suprimidos una vez haya finalizado su colaboración en la operación estadística y los resultados hayan sido publicados. Los números de teléfono deberán estar disociados de las respuestas de los encuestados una vez finalizada la depuración de la información. En los supuestos de encuestas de cumplimentación voluntaria, en caso de no autorizarse la realización de la encuesta, el número de teléfono deberá ser inmediatamente suprimido.

7.º Cualquier dato que se publique a partir de las encuestas realizadas, deberá ser previamente anonimizado de acuerdo con la normativa de secreto estadístico.

El suministro de los datos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las entidades previstas en las letras a), b), c) y d), se realizará de conformidad con las condiciones que se establezcan mediante real decreto y de acuerdo con el procedimiento para el suministro y recepción de la información que, en su caso, pueda fijar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mediante circular.

3. Se garantiza el acceso de los usuarios finales a los servicios de información sobre números de abonados, para cuya consecución la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer obligaciones y condiciones a las empresas

que controlan el acceso a los usuarios finales en materia de prestación de servicios de información sobre números de abonado que deberán ser objetivas, equitativas, no discriminatorias y transparentes.

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia adoptará medidas para garantizar el acceso directo de los usuarios finales al servicio de información sobre números de abonados de otro país comunitario mediante llamada vocal o SMS.

5. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de la normativa en materia de protección de datos personales aplicable.

Por consiguiente, resulta notorio no solo que la regulación contenida en el precepto actualmente vigente de la LGT contempla de manera mucho más completa y detallada las correspondientes garantías específicas que serán necesarias para que la CNMC pueda suministrar los datos facilitados por los operadores a los servicios estadísticos oficiales, sino que la propia habilitación legal prevista en el ut supra transcrito artículo 72 para que puedan cederse los datos a los servicios estadísticos oficiales incorpora una limitación consistente en: “no siendo aplicable en este caso el derecho previsto en el artículo 66.3.c)”, en cuya virtud se dispone que:

“3. Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las guías de abonados y los servicios de información sobre números de abonado, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la numeración tendrán los siguientes derechos: (...)

c) a no figurar en las guías o a solicitar la omisión de algunos de sus datos, en la medida en que tales datos sean pertinentes para la finalidad de la guía que haya estipulado su proveedor o para la finalidad de los servicios de información sobre números de abonados que se presenten en el mercado”.

Así pues, el artículo 72 determina que en los supuestos en los que la CNMC deba suministrar los datos facilitados por los operadores a los servicios estadísticos oficiales ex artículo 72.2.e) no será aplicable el derecho previsto en el artículo 66.3.c) consistente en la exclusión del interesado de las guías o de algunos de sus datos, lo que *mutatis mutandis* determinaría la posibilidad de que tales datos fueran comunicados con las garantías legalmente establecidas. Esta conclusión resulta de la nueva regulación legal, que, a diferencia de la anterior (cuyo contenido era manifiestamente genérico), sí se detiene a introducir las garantías legalmente necesarias y exigibles en los términos que viene requiriendo el Tribunal Constitucional

en sus sentencias 292/2000 de 30 de noviembre y 76/2019 de 22 de mayo. Por esta razón, las consideraciones contenidas en nuestros anteriores informes (i.e. nuestro informe número 22/2022) en la línea de que la remisión genérica a la normativa en materia de protección de datos personales no debía interpretarse como una exclusión de una garantía específica (el derecho a no figurar en las guías de teléfonos), el cual la propia normativa especial excluye únicamente respecto de los servicios de emergencia ex artículo 68.2 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, debe entenderse necesariamente modificada, a día de hoy, habida cuenta de la incorporación en nuestro Ordenamiento Jurídico de una norma legal que excluye expresamente el derecho a no figurar en las guías cuando la comunicación se realice a los servicios estadísticos oficiales en los términos previstos en el artículo 72.2.e) LGT.

Conclusiones

Primera: La encuesta objeto de esta consulta tiene carácter voluntario y no constituye una encuesta oficial para fines estatales, por lo que le resulta aplicable en primer término la normativa en materia de protección de datos personales, así como la normativa sanitaria o de salud pública. A este respecto, sin perjuicio de las competencias en materia de vigilancia de la salud pública reconocidas al Ministerio de Sanidad en sus artículos 12, 13 y 14, y al CCAES en la Orden SCO/564/2004, de 27 de febrero, y sin perjuicio de las competencias en materia de análisis de la información sanitaria reconocidas a la Comunidad de Valencia en la Ley 10/2014, de dicha Comunidad Autónoma, se recomienda incorporar en el informe justificativo realizado una mayor concreción de la competencia del CCAES para la realización de esta encuesta mediante el ejercicio de su propia competencia, así como en el correspondiente convenio de colaboración, previsto en el ut supra artículo 6 de la citada Orden, y que tal y como se contempla en dicho informe justificativo se tiene previsto realizar.

Segunda: El concepto de “datos relativos a la salud” es una categoría autónoma del derecho de la UE que debe interpretarse de manera uniforme en todo su territorio, tal y como resulta de nuestro informe número 49/2024, de conformidad con el cual la mera inclusión del nombre, apellidos y domicilio en una base de datos de una Administración sanitaria determina su consideración como datos de salud al tratarse de *información sobre la persona física recogida con ocasión de su inscripción a efectos de asistencia sanitaria*, con la consiguiente activación del nivel de protección especial que tienen los datos sensibles.

En consecuencia, los datos personales cuya comunicación se desea solicitar a la Generalitat de Valencia tienen la consideración de datos de salud al figurar en el

Sistema de Información Poblacional de la Conselleria de Salud de la Generalitat Valenciana, y la licitud de su tratamiento estará sujeto a un régimen de protección especial que requiere, con carácter previo y en todo caso, el levantamiento de la prohibición general prevista en el artículo 9.1 RGPD.

Tercera: Tal y como se indicaba en nuestro informe número 49/2020, los datos de contacto solicitados no lo son al objeto de su tratamiento estadístico, sino como medio de contacto con las personas que pueden llegar a participar en la encuesta, por lo que no resultan beneficiarios del régimen de compatibilidad de fines previsto en el artículo 5 y 89.1 RGPD.

Sin perjuicio de ello, el carácter especialmente protegido que tienen los datos objeto de esta consulta determina que ni siquiera en la hipótesis (*quod non*) de poderse beneficiar de dicha compatibilidad de fines su tratamiento sería posible en las condiciones indicadas en esta consulta dado que de conformidad con el artículo 9.2.j) RGPD **la prohibición de tratar datos sensibles no aplicará cuando sea necesario para fines estadísticos, pero no de cualquier manera sino de conformidad con el artículo 89.1 RGPD, y sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados Miembros, lo que (en el caso que nos ocupa) nos conduce en primer lugar a la aplicación del artículo 25.2 de la LOPDGDD, que remite en segundo lugar al artículo 11 de la LFPE.**

Mutatis mutandis, el artículo 9.2.i) RGPD invocado en el informe justificativo elaborado por el CCAES permite levantar la prohibición de tratar datos sensibles por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, pero tampoco de cualquier manera, sino **sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados Miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional.** Sucediendo en el supuesto presente que el artículo 41.2 de la Ley 33/2011, de la Ley General de Salud Pública **no habilita el levantamiento de la prohibición de tratar datos sensibles**, en primer lugar porque no concurre el supuesto de hecho previsto en ella (*ser estrictamente necesario para la tutela de la salud de la población*), y en segundo lugar porque por virtud del principio de especialidad normativa resulta aplicable con carácter preferente el artículo 11 LFPE, que establece que “*en todo caso*” serán de aportación voluntaria y solo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los interesados los datos especialmente protegidos.

Cuarta: Una hipotética futura norma con rango de ley que estableciera las medidas y garantías adecuadas para permitir la cesión de datos para su uso exclusivo para encuestas realizadas por las AAPP para fundamentar la toma de decisiones en materia de salud debería adecuarse a la doctrina jurisprudencial del TC y TJUE de continua referencia en nuestros informes, por todos informe número 47/2024, acerca de las garantías y exigencias que debería contener dicha norma legal para que pudiera considerarse respetada la reserva legal existente en materia de derechos fundamentales.

Quinta: Comoquiera que el artículo 16.3 LBRL establece que la comunicación de los datos de carácter obligatorio del Padrón podrán cederse a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de sus competencias, la comunicación de tales datos podría encontrar base jurídica en el artículo 6.1.c) en cuanto a las Administraciones cedentes de los datos, dado que se estarían comunicando a otras Administración Pública para el ejercicio de sus competencias, i.e. la realización de tomas de contacto con el fin de realizar las encuestas, volviéndose a recordar la necesidad de reforzar la justificación de la competencia del CCAES para realizarlas; lo que a su vez, podría dar lugar a que la comunicación al CCAES encontrara su fundamento jurídico en el artículo 6.1.e) RGPD (*“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”*); todo ello siempre que la comunicación se adecuara a los principios de limitación de la finalidad y minimización de datos del artículo 5, así como a la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, recogida entre otras, en su Sentencia 17/2013, de 31 de enero, contraria a un acceso masivo e indiscriminado de datos personales en los supuestos de cesiones entre Administraciones Públicas.

Sexta: En cuanto a la comunicación de números de teléfono el artículo 72.2.e) de la Ley 11/2022, de 28 de junio, establece que la CNMC deberá suministrar gratuitamente los datos que el faciliten los operadores a : ***los servicios estadísticos oficiales para la elaboración de encuestas y el desarrollo de las competencias estadísticas que la ley les confiere, no siendo aplicable en este caso el derecho previsto en el artículo 66.3 c). La cesión se producirá de acuerdo con los principios recogidos en la normativa de protección de datos personales y con las siguientes garantías específicas (...).*** Previsión de donde resulta, en primer lugar, que tales datos habrán de comunicarse a los servicios estadísticos oficiales, y en segundo lugar que no será aplicable a tales efectos el derecho previsto en el artículo 66.3.c) LGT, quedando expresamente excluido este derecho a no figurar en las guías cuando la comunicación de datos se realice a los servicios estadísticos oficiales en los términos previstos en el citado artículo 72.2.e) LGT.